



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-020-2015-01352-01
Demandante:	Samuel Acevedo López
Demandado:	Inversuno S.A.S.
Asunto:	Apelación Sentencia
Procedencia:	Juzgado Veinte Laboral del Circuito de de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Prestaciones sociales, sanción moratoria Ley 50 de 1999 y artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo

Medellín, junio diecisiete (17) de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado de la parte demandada, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, el 13 de diciembre de 2021, en el proceso ordinario

laboral de primera instancia, instaurado por el señor SAMUEL ACEVEDO LOPEZ en contra del INVERSUNO S.A.S. Radicado 05001-31-05-020-2015-01352-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

El señor SAMUEL ACEVEDO LOPEZ convocó a juicio a la sociedad INVERSUNO S.A.S., pretendiendo se declare la existencia de una relación laboral entre las partes, que la misma terminó por despido sin justa causa por la demandada el 24 de marzo de 2015, momento para el cual se le quedó adeudando las cesantías por el año 2014 y 2015, los intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicio del segundo semestre de 2014 y primer semestre de 2015, así como el salario del 15 de marzo al 24 de marzo de 2015.

En consecuencia, que se condene al pago de los conceptos adeudados, al pago de la indemnización por la no consignación de las cesantías contenida en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a la sanción por el no pago de los intereses a las cesantías, asimismo, que se condene al pago de la sanción consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, al pago de la indemnización por despido injusto y a la indexación de las prestaciones sociales.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso, que el señor Samuel Acevedo López comenzó a laborar el 2 de septiembre de 2014, mediante contrato de trabajo a termino indefinido con la sociedad Inversuno S.A.S., desempeñando labores de barman y anexas, pactándose como salario \$700.000 mensuales, más una comisión de \$100.000 quincenales a título de comisión habitual y \$36.000 por auxilio de transporte, que el contrato tuvo vigencia hasta el 24 de marzo de

2015, fecha en la cual la accionada decidió terminar el contrato sin justa causa, momento para el cual el salario básico mensual del actor ascendía a \$1.005.500. Se relató que al demandante nunca se le pagaron prestaciones sociales, que el 30 de abril de 2015, el señor Sergio Emilio Cardona Ospina, remitió por WhatsApp al accionante una liquidación, no acorde a derecho, consignando por Gana la suma de \$500.000 y posteriormente, el 23 de mayo de 2015, le hicieron otro abono por \$250.000, sin que se recibieran más pagos por concepto de liquidación.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado, **INVERSUNO S.A.S.**, dio respuesta a la demanda, aceptando como cierta la existencia de la relación laboral en los extremos indicados, el cargo desempeñado y el salario pactado, indicando que la asignación salarial para la fecha de finalización del contrato era de \$700.000 y no la suma aducida por el demandado, aceptó como cierta las consignaciones efectuadas al demandante por Gana, sostuvo que no es cierto que el contrato haya finalizado sin justa causa y que no es cierto que no se hayan pagado las prestaciones sociales, pues en efecto se hicieron los pagos.

En su defensa formularon las excepciones de inexistencia de la obligación; buena fe por parte del demandado y mala fe de la demandante; compensación y prescripción.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 13 de diciembre de 2021, el Juzgado de conocimiento declaró que entre el demandante y el Inversuno S.A.S., existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 02 de septiembre de 2014

y el 24 de marzo de 2015, fecha en la cual fue terminado por renuncia voluntaria presentada por el demandante; condenó a Inversuno S.A.S., a pagar al demandante el reajuste de las prestaciones sociales y vacaciones adeudadas, en la suma de \$641.494, suma que deberá indexarse al momento del pago; condenó al pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, en la suma de \$909.897 y al pago de la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuantía de \$1.400.000, liquidada desde el 24 de marzo del año 2015 al 23 de mayo de la misma anualidad; declaró prospera la excepción de compensación; absolvió a Inversuno S.A.S., del reconocimiento y pago de la indemnización por despido injusto y condenó en costas a la demandada.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandado

El vocero judicial de la sociedad accionada interpuso recurso de apelación en relación a la condena a la sanción moratoria del artículo 65 del CST, refiriendo que como bien se sabe este concepto está atado inexorablemente a que se haya demostrado o acreditado la mala fe por parte del empleador en el no pago o en la demora del mismo, situación que considera no se comprobó en el proceso, hubo una demora en el pago, pero también es bastante profusa la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de que el simple hecho de la demora, no estructura los elementos axiológicos para acceder a esta sanción moratoria, considerando que el proceso se encuentra huérfano de una prueba contundente, específica y concreta de la mala fe de la sociedad.

Por otra parte, adujo que la juez no valoró adecuadamente los elementos materiales probatorios que se aportaron, tanto en lo que tiene que ver con el interrogatorio de parte del demandante, como la documental, en la que quedó consignado que en realidad al señor no se le debe ningún otro concepto

económico, considerando que en su momento el fallo debió haber sido absolutorio, solicitando a esta Corporación estudie el recurso y proceda a tomar la decisión que en derecho corresponda.

1.4.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, no se pronunció ninguna de las partes.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

-La existencia de la relación laboral entre el señor Samuel Acevedo López y la sociedad Inversuno S.A.S., regida por un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 02 de septiembre de 2014 y el 24 de marzo de 2015

- El pago en cuantía de \$750.000 realizado por la accionada al demandante, con posterioridad a la finalización del vínculo de trabajo, véase folios 18 y 19 del anexo 01 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si debe revocarse la sentencia de primera instancia proferida por la señora Juez Veinte Laboral del Circuito de Medellín, el 13 de diciembre de 2021, para en su lugar absolver a la demandada de todas las condenas, verificando para tal fin, si el empleador canceló al trabajador demandante la totalidad de las acreencias laborales derivadas de la existencia del contrato de trabajo y si se encuentra acreditada la buena fe por parte de Inversuno S.A.S, para el no pago o pago tardío de las prestaciones sociales al demandante, que la exima de la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos se resuelven bajo la tesis según la cual, i) La sociedad accionada no acreditó el pago de los salarios y prestaciones sociales reclamados por el actor; ii) no se acredita una causa plausible y razonable de la cual se deduzca la buena fe de la demandada, por lo que resulta procedente el reconocimiento de las indemnizaciones moratorias. En consecuencia, la sentencia debe ser CONFIRMADA y MODIFICADA, tal y como se pasa a explicar.

2.5. PREMISAS NORMATIVAS

La Constitución Política de 1991 erige al trabajo como un valor fundante del Estado, es así como en el artículo 25 lo define como un derecho y una obligación social que goza en todas sus formas de la especial protección estatal.

A su vez el trabajo subordinado debe ser garantizado en condiciones dignas y justas, con fundamento en los principios generales de igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultad de transigir sobre derechos inciertos, principio de favorabilidad al trabajador en caso de duda sobre la aplicación o interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía de la realidad sobre las formalidades, garantía a la seguridad social, capacitación y descanso necesario. (artículo 53 Carta Constitucional).

En este contexto el Código sustantivo de Trabajo en el artículo 57 establece como obligación del empleador pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos y asimismo el legislador consagró en el referido estatuto otros derechos y prestaciones de carácter social a favor del trabajador dependiente y a cargo del patrono, entre los que se cuentan las vacaciones remuneradas, artículo 189, el auxilio de cesantía, artículo 249 y las primas de servicios, artículo 206. En adición a ellos el artículo 1 Ley 52 de 1975 establece el reconocimiento de los intereses a las cesantías.

Este conjunto de derechos salariales, prestaciones sociales, vacaciones y aportes al sistema de seguridad social integral, son considerados como derechos ciertos e indiscutibles y por ende son irrenunciables para el trabajador.

Es en virtud de la aplicación de los citados principios constitucionales y legales que se caracteriza el derecho laboral como derecho tuitivo y protector de los

derechos de los trabajadores, sin que ello signifique que al ejercer la acción judicial se releve al colaborador de las cargas probatorias.

Los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso, consagran las reglas probatorias de necesidad y carga de la prueba, así:

“Artículo 164. Necesidad de la prueba. “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”

“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”

2.5. CASO CONCRETO

En el caso objeto de análisis, no existe discusión alguna respecto de la existencia de la relación laboral entre el señor Samuel Acevedo López y la sociedad Inversuno S.A.S., misma que tuvo vigencia entre el 02 de septiembre de 2014 y el 24 de marzo de 2015, correspondiendo a la Sala en primer lugar establecer, si la sociedad accionada canceló al demandante la totalidad de salarios y prestaciones sociales causadas en vigor de la relación laboral.

Se afirma en el escrito incoativo de la demanda, que la sociedad Inversuno S.A.S., no canceló al señor Samuel Acevedo López, los salarios correspondientes al periodo 15 al 24 de marzo de 2018, asimismo, que nunca le cancelaron las prestaciones sociales, manifestaciones que corresponden a negaciones indefinidas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba, aunado a lo anterior, atendiendo al principio de la carga dinámica de la prueba, corresponde al empleador, por encontrarse en mejor posición probatoria, acreditar que pagó las acreencias laborales al trabajador.

La Corte Constitucional en la sentencia C086 de 2016, sobre el alcance de la citada disposición precisó:

“Sin embargo, el principio de la carga de la prueba (onus probandi) es un postulado general que admite excepciones en cuanto a la demostración de ciertos hechos. Algunas excepciones son derivadas del reconocimiento directo de un acontecimiento por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo debido a su amplia difusión (hechos notorios). Otras se refieren a aquellos hechos que por su carácter indeterminado de tiempo, modo o lugar hacen lógica y ontológicamente imposible su demostración para quien los alega (afirmaciones o negaciones indefinidas) Y otras son consecuencia de la existencia de presunciones legales o de derecho, donde “a la persona el sujeto procesal favorecido con la presunción solo le basta demostrar el hecho conocido que hace creíble el hecho principal y desconocido, de cuya prueba está exento”

Todas ellas responden por lo general a “circunstancias prácticas que hacen más fácil para una de las partes demostrar la verdad o falsedad de

ciertos hechos”, donde el traslado de las cargas probatorias “obedece a factores razonables, bien por tratarse de una necesidad lógica o por expresa voluntad del legislador, para agilizar o hacer más efectivo el trámite de los procesos o la protección de los derechos subjetivos de la persona”

6.3.- Con todo, el abandono de una concepción netamente dispositiva del proceso, al constatarse cómo en algunos casos surgía una asimetría entre las partes o se requería de un nivel alto de especialización técnica o científica que dificultaba a quien alegaba un hecho demostrarlo en el proceso, condujo a revisar el alcance del “onus probandi”. Fue entonces cuando surgió la teoría de las “cargas dinámicas”, fundada en los principios de solidaridad, equidad (igualdad real), lealtad y buena fe procesal, donde el postulado “quien alega debe probar” cede su lugar al postulado “quien puede debe probar”.”

Bajo el anterior escenario, y atendiendo a lo manifestado por el apoderado recurrente, advierte la Sala, que del estudio de la exigua prueba documental allegada al plenario y del análisis de los interrogatorios, no puede afirmarse, que en efecto, como lo sostiene el alzadista, se encuentre acreditado que no se le adeuda concepto alguno al promotor del proceso, resaltando que el único pago acreditado en el proceso, con posterioridad a la finalización de la relación laboral asciende a la suma de \$750.000 y si bien se aportaron tres comprobantes de nómina, los mismos corresponden a al periodo 1 de febrero de 2015 al 15 de marzo de 2015 y el salario pretendido por el actor, corresponde al causado entre el 15 y 24 de marzo de 2015, adicionalmente, en la liquidación definitiva de prestaciones sociales obrante a folio 17 del anexo 01 del expediente digital, que no fue cancelada al actor, se incluyeron los 9 días de salario reclamados, estando acreditado que al momento del finiquito de la relación laboral, no le fue cancelado al señor Acevedo López ningún concepto, se resalta además, que los documentos que aportó la pasiva, folios 69 a 73 del anexo 01 del expediente digital, tampoco dan cuenta de los pagos que se hubieran realizado al actor, por lo anterior, concluye este Juez Plural, que no incurrió en ningún desatino la a quo al tener por sentado, que al accionante no se le cancelaron sus prestaciones sociales y los últimos días de salario.

Se tiene que la a quo, encontró que al demandante se le adeudaba por concepto de prestaciones sociales y salarios, la suma de \$1.391.494, advirtiéndole que, realizadas las operaciones pertinentes por la Sala, se halló que el valor adeudado asciende a \$1.348.969, valor que resulta levemente inferior al señalado por la Juez de primera instancia, sin que se haya anexado a la providencia la liquidación efectuada a fin de determinar el origen de la diferencia entre ambas liquidaciones.

Así las cosas, al valor obtenido por la Sala, \$1.348.969, debe descontársele la suma de \$750.000, que como se indicó anteriormente, fue la única suma que se acreditó fue pagada al actor, según comprobantes visibles a folio 18 y 19 del anexo 01 del expediente digital, para concluir que al demandante se le adeuda por concepto de salarios y prestaciones sociales \$598.969 y no \$641.494 como lo determinó la Juez, debiéndose en consecuencia, modificar el numeral segundo de la sentencia confutada.

Indemnización moratoria de la Ley 50 de 1990

El empleador debe liquidar el auxilio de cesantías de sus trabajadores en forma definitiva el 31 de diciembre de cada año, por la anualidad o la fracción correspondiente y consignarlas antes del 15 de febrero del año siguiente en la cuenta individual a nombre del trabajador en el Fondo que éste elija.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 *“El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.”*

Sobre este tema, la postura de la Corte Suprema de Justicia, ha sido pacífica, al indicar que el reconocimiento de la indemnización moratoria prevista por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no es automático, debiendo analizarse en cada caso concreto, la conducta de la parte accionada, a efectos de determinar

su procedencia, así lo indicó la Sala de Casación Laboral, entre otras, en las sentencias SL5716 de 2018 y SL 3858 del 06 de octubre de 2020, última en la cual se adocrinó:

“Ahora, como se dijo en precedencia, tal sanción moratoria surge con el incumplimiento del empleador de consignar las cesantías dentro del plazo fijado por el legislador, por lo que la misma goza de una naturaleza eminentemente sancionatoria y como tal, su imposición está condicionada al examen, análisis o apreciación de los elementos subjetivos que guiaron el proceder de la demandada.

Significa lo anterior que para la aplicación de esta sanción el sentenciador debe analizar en cada caso si la conducta del empleador estuvo justificada con argumentos que, pese a no resultar viables o jurídicamente acertados, sí puedan considerarse atendibles y justificables, en la medida en que, razonablemente, lo hubiesen llevado al convencimiento de que nada adeudaba a su trabajador, lo cual, de acreditarse, conlleva ubicar el actuar del obligado en el terreno de la buena fe”

Al respecto, se reitera que no acreditó la parte demandada que hubiera procedido a la consignación de las cesantías a un fondo especializado, pues como bien lo expuso la a quo, ello no se puede evidenciar del estado de cuenta que milita a folios 20 del anexo 01 del expediente digital el cual fue expedido por Protección S.A., sin que se encuentre acreditada la existencia de una justa causa o una razón que justifique la no consignación de las cesantías, reflexión por la cual es procedente la condena, en los términos indicados por la falladora, esto es, en relación a las cesantías del año 2014, corriendo la sanción desde el 15 de febrero de 2015, hasta el 24 de marzo de la misma anualidad, fecha en la cual finalizó la relación laboral, encontrándose ajustada la liquidación en la suma de \$909.897.

Sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo

Señala la Sala que el no pago de los salarios y prestaciones sociales, fue calificado por el legislador de tiempo atrás, como una conducta merecedora de sanción. Es así como el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2001, dispone:

“Artículo 65. Indemnización por falta de pago:

1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero”.

En este tema, ha sido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la que ha precisado que la sanción por el retardo en el pago de salarios y prestaciones sociales del trabajador no es de aplicación automática, al respecto, en sentencia SL1451 del 25 de abril de 2018, recordó *“La Corte en desarrollo de su función de interpretar las normas del trabajo y crear jurisprudencia, ha sostenido que la sanción moratoria no es automática. Para su aplicación el juez debe constatar si el demandado suministró elementos de persuasión que acrediten una conducta provista de buena fe (SL8216-2016).”*

En esta perspectiva lo que debe probarse en el proceso es la buena fe que exonere de la sanción y no la mala fe, por ende, quien tiene la carga probatoria de probar el hecho, es, sin duda, el empleador, así lo precisó la Sala Laboral de

la Corte Suprema de Justicia, desde la sentencia Radicación 32529 de 2009, así:

“De suerte que la indemnización moratoria procede cuando, después del examen del material probatorio, el dispensador de justicia concluye que el empleador no estuvo asistido de buena fe. Se equivoca por tanto el recurrente cuando, al inicio del cargo, afirma que la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que la indemnización moratoria “... requiere que quien la aduce demuestre una conducta torticera de empleador para perjudicar al trabajador”, porque, como ha quedado visto, por el contrario, quien debe demostrar que su conducta estuvo revestida de buena fe es el empleador; mientras que al trabajador le basta probar la omisión o el retardo en el pago de los derechos laborales que da lugar a la sanción”.

Lo anterior resulta razonable, además, teniendo en cuenta que las circunstancias constitutivas de buena fe, como lo son aquellas causas plausibles, entendibles, justificadas para no haber procedido al pago o haber realizado un pago deficitario, competen exclusivamente al empleador, de ahí, que no es posible atender el razonamiento efectuado por el apoderado recurrente.

En el sublite, no se acreditó una causa razonable, plausible, entendible que justifique el no pago de las prestaciones sociales del demandante en vigencia de la relación laboral, así como tampoco el no pago de los últimos nueve días de salarios, pues si bien se expuso en el proceso, que la sociedad accionada empezó a presentar problemas económicos, ello no quedó acreditado, por lo que no resultan suficientes las meras afirmaciones que hubiera realizado la parte a efectos de exonerarse del reconocimiento de esta sanción.

Advierte la Sala que la Juez cognoscente, ordenó el reconocimiento de la sanción moratoria desde el 24 de marzo de 2015 al 23 de mayo de 2015, fecha en que fue realizado el último abono al accionante, encontrándose ajustada la liquidación por dicho periodo, sin que la parte accionante manifestara

inconformidad alguna al respecto, situación por la cual se releva la Sala de efectuar pronunciamiento en torno a si la indemnización cesó con el pago del 23 de mayo o si la misma continuaba generándose en atención a que el pago efectuado fue solo parcial.

Por lo expuesto, se confirmará la condena a las sanciones moratorias impuesta por la a quo.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada **INVERSUNO S.A.S.**, se fija como agencias en derecho la suma de \$1.000.000.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **MODIFICA el numeral segundo** de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, el 13 de diciembre de 2021, en el proceso ordinario instaurado por el señor SAMUEL ACEVEDO LOPEZ en contra de la sociedad INVERSUNO S.A.S., en el sentido de que la accionada debe pagar al demandante por concepto de reajuste de salarios y prestaciones sociales la suma de \$598.969.

2. Se **CONFIRMA** la sentencia en las demás partes.

3.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada **INVERSUNO S.A.S.**, se fija como agencias en derecho la suma de \$1.000.000.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


JULIO RAFAEL FORDECILLA PAYARES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO